

2024ERO292058 1 Dic/2024. 1

665

Villavicencio (Meta), 05 de diciembre de 2024

SEÑORES

Directivos Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Avenida 40 Calle 15 Esquina Centro Comercial Llano Centro Of. 4o. Piso

Email: responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co

Villavicencio - Meta

ASUNTO: Descargos frente auto de imputación número 0392 del 15 de noviembre del 2024 dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-80503-2017-28946

IVANA CAMILA PANTOJA CABRERA identificada con la cédula de ciudadanía N.º 1.021.662.048 expedida en Acacias Meta, estudiante adscrita al Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio, actuando como defensora de oficio de María del Carmen Tonelli Sokolich **identificada con Cedula Extranjería N° 249.974 Expedida en Bogotá D.C.** procedo a presentar argumentos de defensa frente al auto de imputación número 0392 de 15 de noviembre del 2024 en los siguientes términos:

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

La defensa técnica, se permitirá exponer sus descargos, basados en los siguientes argumentos de defensa que considera deben ser tenidos en cuenta antes de que los directivos colegiados de la Gerencia Departamental del Meta decidan sobre la responsabilidad de mi representado, conforme expongo a continuación:

El principal elemento para atribuir responsabilidad fiscal en Colombia es el Daño al patrimonio público, definido este por la ley 610 de 2000 como:

"...ARTÍCULO 6o. DANO PATRIMONIAL AL ESTADO. Apartes tachados

INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o con contribuyan al detrimento al patrimonio público..."

En el marco del presente proceso de responsabilidad fiscal relacionado con el Convenio 5211512, se evidencian inconsistencias en el manejo y valoración de las pruebas utilizadas, así como irregularidades que afectan los derechos fundamentales de la señora María del Carmen Tonelli Sokolich.

El despacho ha basado su imputación en documentos e informes relacionados con autorizaciones de giros y auditorías internas. Sin embargo, estas pruebas carecen de un análisis técnico completo y no permiten establecer de manera directa y contundente la existencia de un daño fiscal atribuible a las actuaciones de la Directora de Gestión Social. Además, varias de estas pruebas provienen de actuaciones previas declaradas nulas. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 610 de 2000, las pruebas practicadas en procedimientos anulados solo conservan su validez si fueron obtenidas de manera legal y regular, lo cual no se cumple en este caso.

Asimismo, no se ha demostrado que las decisiones tomadas por la señora Tonelli Sokolich hayan sido dolosas o realizadas con culpa grave, ni que exista una relación causal directa entre dichas decisiones y el supuesto daño fiscal. La autorización de giros, por sí sola, no constituye prueba suficiente para atribuir responsabilidad fiscal, pues estas decisiones fueron tomadas dentro de sus competencias y en cumplimiento de sus funciones delegadas.

El procedimiento también presenta vulneraciones al debido proceso y al derecho de defensa, como la falta de notificación adecuada de ciertos elementos probatorios y la omisión de actos procesales clave que limitan la posibilidad de controvertir las pruebas. Estas irregularidades afectan la objetividad del proceso y desconocen principios fundamentales de legalidad, objetividad y presunción de inocencia.

1. Falta de Validez de los Medios Probatorios Utilizados:

La imputación se fundamenta en un informe técnico cuya existencia y validez ya han sido cuestionadas dentro del mismo proceso. Este informe fue originado en una actuación previa que fue declarada nula, lo que implica que cualquier prueba derivada de esta actuación también pierde su eficacia jurídica. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 610, únicamente las pruebas obtenidas de forma legal pueden ser conservadas tras la declaración de nulidad de un proceso, lo que no ocurre en este caso.

2. Irregularidades en el Procedimiento Administrativo:

El proceso actual presenta irregularidades desde su apertura, al fundamentarse en elementos provenientes de un proceso verbal previamente anulado. Cualquier actuación subsiguiente que derive de una actuación declarada nula carece de legitimidad y afecta los derechos fundamentales de María del Carmen, incluyendo su derecho al debido proceso.

3. Ausencia de Dolo o Culpa Grave:

La responsabilidad fiscal exige la demostración de una actuación dolosa o culposa por parte del implicado. En el caso de María del Carmen, no se ha demostrado que sus acciones hayan sido intencionales ni que haya incurrido en una negligencia grave. Además, no se ha probado una relación directa y causal entre sus acciones y el supuesto daño fiscal, lo cual es un requisito esencial para atribuir responsabilidad.

4. Violación al Derecho de Defensa y Contradicción:

Durante el proceso, María del Carmen no ha contado con las garantías procesales necesarias para ejercer plenamente su derecho a la defensa y a contradecir las pruebas presentadas en su contra. La falta de notificación adecuada sobre ciertos elementos probatorios y la omisión de actos procesales clave comprometen la imparcialidad y la objetividad del procedimiento.

PETICIÓN

De acuerdo a los argumentos expuestos anteriormente, por **NO EXISTIR CERTEZA DEL DAÑO**, no se puede afirmar que exista un nexo de causalidad con la presunta conducta atribuida a María del Carmen Tonelli Sokolich. En consecuencia, resulta menester invocar la **Ley 610 de 2000**, en su **Artículo 54**, en el sentido de **EMITIR UN FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL**, dado que no existe prueba suficiente que conduzca con certeza a la estructuración de todos los elementos necesarios para responsabilizar fiscalmente a la señora Tonelli Sokolich.

Lo anterior debe tenerse en cuenta, ya que se debe garantizar el **debido proceso**, y con ello, el **principio de legalidad probatoria**, dado que las pruebas presentadas no cumplen con los requisitos legales establecidos. En vista de lo expuesto, solicitamos que se desestime la responsabilidad fiscal atribuida.

NOTIFICACIONES

Autorizo para recibir notificaciones al correo electrónico ivanapantoja@ustavillavo.edu.co

Ivana Camila Pantoja Cabrera

C.C 1.021.662.048

Estudiante adscrita a consultorio jurídico de la universidad Santo Tomas

Correo electrónico: ivanapantoja@ustavillavo.edu.co

Santiago de Cali, 29 de noviembre de 2024

Señores

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL META
Ciudad

ASUNTO: Aceptación de Notificación Personal, referente al contenido del Auto No.0392 de fecha 15 de noviembre de 2024, AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PRF DOBLE INSTANCIA No. 80503-2017-28946.


GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, ^{celular}Identificado con la cédula de ciudadanía No.19.395.114 expedida en Bogotá, mediante el presente escrito **ACEPTO** que las distintas providencias o decisiones que deban ser notificadas personalmente por parte de la Contraloría General de la República y la Gerencia Departamental Colegiada del Meta, dentro del proceso de responsabilidad fiscal radicado **PRF-80503-2017-28946**, me sean notificadas a la siguiente dirección de correo electrónico notificaciones@gha.com.co, conforme lo preceptuado en el artículo 56 y el numeral 1 del artículo 67, de la Ley 1437 de 2011.

Igualmente me permito informar la dirección para correspondencia y número de teléfono, para cuando sea necesario ser contactado a través de estos medios, y me comprometo a informar cualquier cambio de dirección de domicilio o residencia para notificaciones, correo electrónico, o número telefónico o celular que se presente en el curso del proceso:

Dirección: Avenida 6ª Bis No. 35 N-100. Centro Empresarial Chipichape-Oficina 212.

No. De teléfono: 3155776200

Atentamente


GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
CC/ No. 19.395.114 Bogotá D.C.
T. P. No. No. 39.116 del C. S. de la J.

Cali - Av. 6A Bis #35N-100, Of. 212, Cali, Valle del Cauca,
Centro Empresarial Chipichape
+57 315 577 6200 - 602-6594075

Bogotá - Calle 69 No.04-48 Of. 502, Ed. Buro 69
+57 3173795688 - 601-7616436

GHA
ABOGADOS & ASOCIADOS